

EL LADO INVISIBLE DEL CAMPO: EXTERNALIDADES AGRÍCOLAS EN BOLIVIA Y EL RETO DE CONSTRUIR UN MODELO SOSTENIBLE

Cuando se habla de agricultura, se suele pensar en alimentos, trabajo rural y desarrollo económico; pero hay una cara menos visible de esta actividad: las externalidades. En términos simples, son los efectos secundarios –positivos o negativos- que una actividad económica genera no solo en personas, sino también en el medio ambiente, empresas, instituciones públicas y sistemas productivos, que no están directamente involucradas. Y, lo más importante, estos impactos no se reflejan en los precios del mercado.

En Bolivia, las externalidades están presentes en casi todos los sectores. La minería y los hidrocarburos, por ejemplo, pueden dejar tras de sí contaminación y deterioro ambiental. La industria, aunque genera empleo y acceso a tecnología, también contribuye a la polución del aire y del agua. Incluso el turismo, que parece inofensivo, puede alterar ecosistemas o generar congestión urbana. Pero si hay un sector donde estas externalidades se sienten con especial fuerza, es en el agropecuario.

De acuerdo con información oficial, este sector representa cerca de 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; y es el cuarto mayor contribuyente a la economía nacional, mostrando su importancia social, constituyéndose en un importante generador de empleo. Sin embargo, su crecimiento también trae consigo impactos que no siempre se observan ni se contabilizan: deforestación, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, contaminación de fuentes de agua por agroquímicos y emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente por la ganadería extensiva.

Estos efectos no son menores; afectan a comunidades locales, dañan ecosistemas y generan costos que no siempre son asumidos por quienes los provocan. No todo es negativo, también hay externalidades positivas que merecen ser reconocidas; por ejemplo, los sistemas agroforestales que protegen el medio ambiente, las prácticas agrícolas tradicionales que conservan saberes ancestrales, el empleo rural que sostiene familias enteras, y el aporte clave a la seguridad alimentaria del país.

El problema es que estas prácticas sostenibles suelen recibir menos apoyo estatal y financiero, lo que limita su alcance y viabilidad. Por eso, cada vez más voces –desde expertos hasta organizaciones sociales- proponen medidas para “internalizar” estas externalidades. Es decir, que los costos y beneficios se reflejen en el sistema económico, y que quienes generan impactos negativos paguen por ellos, mientras se premia a quienes cuidan el entorno.

Entre las propuestas más destacadas están los instrumentos fiscales verdes, por ejemplo, impuestos a prácticas contaminantes y estímulos económicos para quienes adopten tecnologías limpias. También se habla de regular el uso del suelo, proteger áreas ecológicas sensibles y limitar la expansión agrícola en zonas vulnerables.

Otro eje clave es el fortalecimiento de la agricultura familiar. Esto implica facilitar el acceso a mercados, financiamiento, asistencia técnica y reconocimiento legal a comunidades rurales e indígenas. No se trata solo de corregir fallas del mercado, sino de avanzar hacia un modelo agrícola más justo, resiliente y preparado para los desafíos que demanda el momento actual.

En el fondo, hablar de externalidades no es solo un asunto técnico. Es una cuestión política, ética y social. En un país tan diverso como Bolivia, donde conviven saberes

milenarios y tecnologías modernas, el verdadero reto está en encontrar un equilibrio que no sacrifique el futuro por los beneficios inmediatos.

El agro boliviano tiene un enorme potencial, pero también una gran responsabilidad. Reconocer sus externalidades es el primer paso para construir un modelo que no solo produzca y exporte; sino que también proteja, incluya y sea sostenible.

Waldo Gómez Reintsch
FUNDACIÓN JUBILEO